

El Salvador proceso

informativo semanal

Año 18
número 788

diciembre 24
1997

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

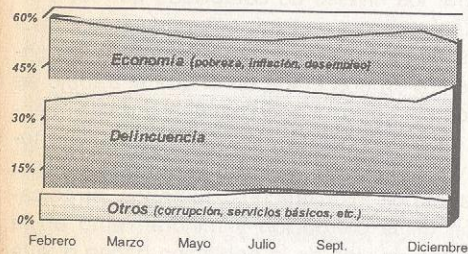
- Balance de 1997. Las debilidades de la institucionalización democrática*
- Balance Político*
- Balance económico*
- Balance social*
- Balance regional*
- El balance de la opinión pública en 1997: problemas nacionales y polarización*
- Los derechos humanos en 1997*
- Cronología de 1997*

El balance de la opinión pública en 1997: problemas nacionales y polarización

En términos generales, durante 1997 la opinión salvadoreña continuó siendo dominada por la preocupación de los ciudadanos por los ya inveterados problemas nacionales: la violencia, expresada en la criminalidad, las pandillas, los secuestros, etcétera; y los aspectos de orden económico: pobreza, inflación, desempleo. Sin embargo y a diferencia de otros años, en el año que recién termina, estas preocupaciones sobre las problemáticas de la realidad que afectan a los ciudadanos se vieron estimuladas por otros acontecimientos y coyunturas en un contexto de constante polarización que también estuvo presente en la opinión pública salvadoreña y que, aunque no involucró la atención de todos los ciudadanos como en el caso de los problemas, sí tuvo una presencia importante.

Figura 1

Los principales problemas del país en la opinión pública durante 1997



Fuente: Bases de datos del IUDOP.

largo período en el cual los salvadoreños habían estado acusando a la violencia, con sus expresiones de delincuencia, como el principal problema nacional —por encima de los dilemas económicos— los ciudadanos comenzaron a ver en la economía la dificultad fundamental del país. Esto se dio bajo el decidido influjo de una campaña electoral en la que el FMLN y el resto de partidos de oposición aprovecharon para sacar a debatir de forma nacional los problemas económicos. Así, un poco más de la mitad de la población, alrededor de 55 por ciento, llegó a las elecciones convencida de que el desempleo, la inflación y la pobreza eran las problemáticas esenciales del país en ese momento (ver **ECA, 581-582**).

Esto tuvo un impacto notable en las elecciones. Junto a la opinión que señalaba a la economía como el principal problema económico, muchos salvadoreños —como efecto de campaña electoral, entre otras cosas— comenzaron a atribuir al gobierno y al partido oficial, la responsabilidad mayor por el problema de la economía, lo cual, de alguna manera contribuyó a la erosión experimentada por el partido gobernante en tales elecciones.

Por su parte, las elecciones para alcaldes y diputados realizadas en marzo de 1997 fueron particularmente distintas a las anteriores. Esto no sólo por el resultado de las mismas sino también por la dinámica que se desarrolló en el proceso. Si se ha dicho en otros artículos que los comicios de 1994 se caracterizaron por ser el primer proceso electoral de la posguerra y que permitió una participación ideológica amplia sin precedentes en la historia política de este país; los comicios que se realizaron el año que termina, cuya importancia en términos de alcance político es supuestamente menor, constituyeron las elecciones más disputadas y, para muchos, con los resultados más sor-

prendentes del ciclo electoral contemporáneo. Sin embargo, no sólo eso caracterizó al proceso electoral. Las elecciones que tomaron lugar en este año se distinguieron por un manejo irregular y extemporáneo de la legislación electoral con claras intenciones de favorecer a ciertos institutos políticos; esto tuvo repercusiones sobre la opinión pública salvadoreña que ya desconfiaba del proceso electoral y de los partidos políticos. Además y relacionado con lo anterior los comicios se “destacaron” por el desarrollo de una campaña electoral para diputados de muy bajo nivel, a causa de las agresiones verbales y de la ausencia de propuestas. Estas características, sin embargo, tienen sentido en el contexto de lo que constituye la particularidad fundamental de este evento: unas elecciones reñidas y cuyos resultados parecían más impredecibles que nunca.

Efectivamente, las encuestas pre-electorales mostraban a los dos partidos más grandes, ARENA y FMLN con una pugna muy cerrada por la mayor parte de votos de la población complementado con el poco apoyo que los ciudadanos parecían prestar a los partidos más pequeños y que constituían el centro del espectro ideológico. En este sentido, y como parece ser la norma de las dinámicas electorales de la posguerra, el ambiente político social se polarizó en la campaña electoral, aunque en esta ocasión los análisis sobre los datos de la opinión pública señalaron que el ambiente de polarización fue menos intenso que en el año 94. Sin embargo, los sondeos de opinión pública reportaron que en esta ocasión, los niveles de confianza en el proceso electoral, en el aparato político y en los partidos eran sensiblemente menores. Al iniciar el año, sólo el 8 por ciento de la población mostraba mucha confianza en la clase política salvadoreña; más aún, alrededor de la mitad de los ciudadanos tenía poca o ninguna confianza en el proceso electoral y el 41 por ciento creía que habría fraude en las elecciones (**ECA, 581-582**). Pero al mismo tiempo, la dinámica electoral del 97 registró a través de los sondeos de opinión pública un peculiar aumento del interés ciudadano por el proceso. Efectivamente, los salvadoreños se mostraron un poco más interesados en las elecciones

de este año que lo que estuvieron en las así llamadas “elecciones del siglo” de 1994. Esto se debió a las condiciones de competitividad que parecían existir en estos sufragios a diferencia de los anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, los salvadoreños no tenían claro quién podía ser el ganador absoluto de la competencia electoral y esto introdujo un elemento que atrajo la atención ciudadana, aunque a juzgar por los niveles de participación electoral, el interés no fue suficiente como para provocar una asistencia masiva a las urnas (ver **Proceso, 749**).

A pesar de que las encuestas habían mostrado que los dos partidos más grandes tenían prácticamente iguales posibilidades de ser ganadores, los resultados de las elecciones —tanto en términos de apoyo partidista, como de participación electoral— sorprendieron a propios y a extraños, sobre todo en la clase política. El partido de izquierda resultó ganador de los comicios municipales en la mayoría de ciudades importantes del país, al mismo tiempo que el partido oficial perdió un importante número de escaños en la Asamblea Legislativa. Una evaluación posterior de las elecciones usando una pesquisa de opinión pública mostró que ese fenómeno se explica, en buena medida, a partir de un sentimiento de desencanto popular hacia la gestión del partido ARENA al frente del Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en el área económica (ver **ECA, 583**). Esto explica la renovada preocupación de la ciudadanía por los problemas económicos en momentos electorales.

Estos resultados modificaron sustancialmente el balance de poder en la Asamblea Legislativa, algo que en términos generales resultó bien visto por la población salvadoreña. En una encuesta realizada para conocer las expectativas de los ciudadanos hacia las nuevas autoridades nacionales, el IUDOP encontró que casi la mitad de la población, el 45 por ciento, pensaba que el control del parlamento por parte de la oposición era un hecho positivo; más aún, en un dato sin precedentes a causa de la costumbre ciudadana a los regímenes presidencialistas, casi el 40 por ciento de los salvadoreños pensaba que la Asamblea era el órgano del Estado con más poder en la actualidad (ver **Proceso, 775**). Sin em-

bargo, el resultado de las elecciones inauguró una dinámica de debate político permanente que en muchas oportunidades y coyunturas revivió las tendencias a la polarización que vive el país en los eventos electorales. Buena parte de ese debate ha sido productivo, pero al mismo tiempo ha mostrado que todavía los partidos políticos están lejos de buscar salidas concertadas a los más graves problemas del país.

Las coyunturas políticas

La forma de trabajo de la nueva Asamblea no se hizo esperar. Una de las primeras acciones de la misma fue detener el proceso de privatización de las empresas públicas que había estado impulsando el Ejecutivo, mediante la derogación de la ley para vender la administración de telecomunicaciones (ANTEL). Esto produjo un atolladero en la dinámica política, pero tal medida recibió un amplio respaldo de la población. De hecho, una encuesta de evaluación del desempeño del gobierno realizada a finales del mes de mayo reveló que el 57 por ciento de la población estaba en contra de la privatización de las empresas del Estado y que sólo un 23.7 por ciento estaba a favor de la misma (**Proceso, 760**). No obstante, el partido oficial junto con algunos sectores de la empresa privada desarrollaron una campaña para revertir la decisión de los diputados; dentro de esta campaña inclusive se llegó a la publicación de los resultados de encuestas de opinión pública con preguntas diseñadas para obtener respuestas favorables, realizadas por una empresa de sondeos costarricense, y según las cuales los ciudadanos apoyaban en un 80 por ciento los esfuerzos de privatización que realizaba el gobierno (El Diario de Hoy, 16 de julio de 1997). Al final, la Asamblea aprobó una ley que dio luz verde al proceso de privatización de ANTEL, frente a una opinión pública que no termina de estar convencida de los beneficios de esa privatización.

Pero el suceso que probablemente sacudió más a la opinión pública durante 1997 fue el destape del fraude financiero en las instituciones FINSEPRO-INSEPRO. Los salvadoreños fueron sorprendidos por la magnitud del desfalco en el cual estaba involucrado uno de los personeros más altos del partido oficial.

Enseguida buena parte de los ciudadanos comenzó a responsabilizar al gobierno por no haber sido capaz de prevenir el fraude: un 57.5 por ciento de los encuestados por el IUDOP pensaba que el gobierno tenía algo o mucha responsabilidad por no haber prevenido el escándalo (**Proceso, 787**). Aunque muy poca gente se sintió afectada directamente por el defraudamiento, el tipo de sectores que éste afectó —esencialmente personas de clases altas y media—altas, algunas vinculadas al partido gobernante— el impacto y la magnitud del mismo fueron muy grandes; el sistema financiero entró en una crisis de confianza del público, el cual comenzó a retirar los fondos de las instituciones financieras.

Lo anterior tuvo repercusiones a nivel político también. La Asamblea entró en una interesante dinámica, esencialmente impulsada por los partidos de oposición, para interpelar y pedirle cuentas por el descalabro financiero por primera vez en muchos años, a un funcionario de alto rango del gobierno, esto es, al presidente del Banco Central de Reserva. Aunque la mayor parte de la ciudadanía que siguió con atención los hechos dentro de la Asamblea no quedó satisfecha con el desempeño de los diputados ni con la defensa del presidente del BCR; la mayoría de los ciudadanos, seis de cada diez, evaluaron de manera positiva el que se hayan pedido cuentas a un funcionario del Estado. Sin embargo, la politización del escándalo implicó que los dirigentes políticos se enfrascaran en acusaciones y contraacusaciones sobre los implicados en el escándalo, vinculándolos inclusive con los orígenes de los fondos para financiar la pasada campaña electoral. Ello no contribuyó a las investigaciones sobre el escándalo y a esclarecer el paradero de los fondos del público, pero sí alimentó la inveterada desconfianza de la población por la clase política y por las autoridades del país, especialmente hacia el partido de gobierno.

El escándalo financiero y la forma de conducir el proceso de modernización del Estado fueron algunos de los detonantes para que el partido en el gobierno entrara en una crisis interna que afectaría al gobierno y cuya expresión más evidente fue la destitución y la renuncia de dos prominentes miembros de gabinete de gobierno y correligionarios de

ARENA: el Superintendente de Energía y Comunicaciones y el Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado. El partido oficial, de cara a su convención nacional realizada en agosto y frente al escepticismo popular, tuvo que enfrentar entonces la divulgación de un espinoso debate interior sobre su actuación política, la cual había quedado pendiente luego del resultado de las elecciones de marzo.

Mientras tanto, el tercer aniversario de la administración Calderón Sol puso en relieve el hecho de que la opinión pública sobre el desempeño del gobierno se había estabilizado. Como es normal, el IUDOP realizó una encuesta para conocer la evaluación que hacían los ciudadanos sobre los tres años de gobierno; los resultados mostraron que la gente básicamente percibía los mismos logros (arreglo de la infraestructura del país) y los mismos fracasos (incapacidad para controlar la delincuencia y para mejorar la situación económica), aunque en esta oportunidad la gente comenzaba a señalar con más intensidad los beneficios de la reforma educativa. Sin embargo, la evaluación general se mantenía similar y en términos globales la visión sobre el gobierno no empeoró pero tampoco mejoró substantivamente (**Proceso, 760**). Las encuestas revelaron que a la base de esto se encontraba la percepción de que los problemas principales seguían sin ser resueltos. El gobierno de Armando Calderón Sol siguió cargando con la misma opinión que de él se han hecho los ciudadanos prácticamente desde el primer año de su gestión y que afectó el nivel de apoyo ciudadano recibido por ARENA en las elecciones de marzo.

Pero volviendo al aspecto político, 1997 ha sido un año de importantes reacomodos en la esfera política partidista, esto no sólo porque las elecciones modificaron la correlación de fuerzas con poder político, sino que además y como producto de esos comicios y de las próximas elecciones presidenciales en 1999, los partidos se replantearon preparándose para esa contienda electoral de fin del siglo. ARENA lo hizo bajo una etapa de crisis —como ya se ha dicho— producto de la erosión enfrentada en las elecciones, pero además de serias discrepancias sobre el proceso

de conducción de la modernización al interior del gobierno. En cierta medida la crisis fue resuelta, o al menos aplazada, mediante el reciclaje de sus cuadros dirigenciales que llevó a Alfredo Cristiani a la cabeza del partido. Aunque el expresidente mantiene una importante cuota de simpatía entre la opinión pública —que inclusive lo hace figurar como una de las figuras presidenciales para 1999—, el cambio de dirección no impresionó significativamente a la opinión pública salvadoreña, la cual se mantuvo más bien expectante. Según la encuesta de evaluación anual, sólo un 12.7 por ciento de la población pensaba que la imagen de ARENA mejoró después de su convención y el resto pensaba que la imagen seguía igual o había empeorado; además, la gran mayoría pensaba que la dirección de Cristiani no aumenta las probabilidades de victoria del partido oficial en 1999 (**Proceso, 787**).

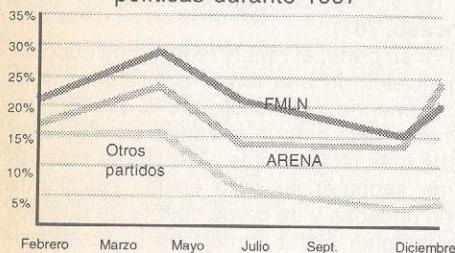
Por su parte, el FMLN renovó sus cuadros dirigenciales de una forma significativa pero mucho menos traumática que el partido gobernante. Esto porque el partido de izquierda estaba más relajado que ARENA ya que venía de saborear su éxito en las elecciones recién pasadas y de darse cuenta de que podía mantener cierta ventaja en las preferencias partidistas sobre el partido oficial. Aunque la celebración de la convención del FMLN estuvo precedida por la divulgación de una polémica de enfrentamiento subrepticio de varias de las tendencias del partido izquierdista, para sorpresa de muchos —incluida la opinión pública en general—el relevo se dio sin mayores conflictos haciendo aparecer al Frente como un partido que estaba en capacidad de restaurarse para enfrentar el siguiente reto electoral. Esto favoreció la polémica imagen del FMLN en la opinión pública, al menos como partido capaz de llegar al poder: a finales de 1997, cerca de un 38 por ciento de los ciudadanos pensaba que el FMLN podría ganar las elecciones presidenciales de 1999, mientras que un 27.7 por ciento se decantaba por Alianza Republicana Nacionalista (**Proceso, 787**).

Con todo, tanto ARENA como el FMLN mantuvieron durante 1997 un duelo por la hegemonía en las preferencias políticas de los

ciudadanos, a tal grado que al finalizar el año prácticamente acumulaban la totalidad del apoyo político que la población podía brindar a la clase política. En tal sentido, dadas las condiciones de correlación de fuerzas que se crearon con el resultado de las elecciones, la polarización que en otros años se limitaba a las campañas electorales se mantuvo durante todo el ciclo, aunque quizás con un poco menos de intensidad. La pugna por la supremacía política no era exclusiva a la Asamblea, se reflejaba también en las preferencias de la población. Este fenómeno dominó la mayor parte de las dinámicas políticas del año 97.

Figura 2

Tendencias en las preferencias políticas durante 1997



Fuente: Bases de datos del IUDOP.

Dentro de este contexto, otra de las coyunturas políticas de relevancia del año tomó lugar en el debate de la condonación de la deuda agraria. Esta discusión mostró un nivel mayor de complejidad en comparación con otras —como la privatización de ANTEL o la interpelación del presidente del BCR— probablemente debido a que la misma población se encontraba dividida en sus opiniones respecto al perdón de la deuda. A pesar de que los distintos sectores involucrados en el tema desarrollaron sendas campañas para favorecer o rechazar la condonación, los ciudadanos salvadoreños se mostraron divididos sobre este tema: una cuarta parte de la población, el 25 por ciento, estaba a favor de la condonación total de la deuda agraria, mientras que un 29 por ciento estaba en contra totalmente y un poco más

del 33 por ciento favorecía una condonación parcial (**Proceso, 787**).

El recuento del año 1997 en la opinión pública no estaría completo si se deja de lado el escándalo producido por las investigaciones sobre los secuestros. En el último trimestre del año, salieron a la luz informaciones que sindicaban a antiguos miembros de la guerrilla en las bandas criminales que habían realizado sonados casos de secuestros en los últimos seis años. El caso puso en evidencia, de manera directa, los alcances de las bandas criminales que continúan operando en el país y las posibles vinculaciones de éstas con los grupos de poder político; pero también, de forma indirecta, ejemplificó la manera en que los medios de comunicación y algunos funcionarios pueden manipular la información para deteriorar la imagen de un grupo político sobre la base de ciertos intereses políticos. De hecho, la mitad de la población, esto es el 50 por ciento, opinaba que algunos dirigentes del FMLN estaban implicados en los casos de secuestros; pero al mismo tiempo, cerca del 60 por ciento pensaba también que el escándalo era un manejo político del partido oficial. Lo anterior tuvo un decidido impacto en la imagen del FMLN, lo cual se unió a ciertas expresiones de desencanto por la forma en que el Frente estaba conduciendo algunas municipalidades, y que, al cerrar el año, le hizo ceder varios puntos en las preferencias políticas de los ciudadanos, luego de haber mantenido cierta ventaja en las preferencias políticas durante la mayor parte de 1997.

Esta última coyuntura sobre los secuestros trae a cuenta dos temas que fueron importantes para el proceso social del país y aunque no fueron el centro de una polémica o de un escándalo como los casos anteriores, si formaron parte de la dinámica de la opinión pública en 1997. Estos son: la violencia y los medios de comunicación.

La violencia

Como ya se ha visto al inicio de este balance, en el año que termina, la violencia, con sus expresiones básicas de delincuencia común y de crimen organizado, continuó siendo un problema real para los salvadoreños. Los avances en la profesionalización del cuerpo policial y en la depuración del órgano de

justicia contribuyeron a un mejoramiento en la eficiencia en la investigación del delito y en consecuencia a una reducción de los índices de criminalidad en comparación con los años anteriores, pero este descenso en las tasas no ha revertido las condiciones de inseguridad pública que prevalecen en el país y por tanto no parecen haber sido suficientes para alejar de los ciudadanos el temor por la violencia (**Proceso, 772**). Además, los esfuerzos institucionales del gobierno por combatir la delincuencia parecen haber estado más concentrados en publicitar las operaciones espectaculares del cuerpo policial y los compromisos de la presidencia para crear un país seguro para la inversión extranjera, que en un impulso decidido a una política integral de prevención y combate a la violencia en todas sus expresiones. Ello ha causado que los ciudadanos no se decidan a confiar plenamente en las autoridades, aunque la PNC es una de las instituciones que recibe mayores niveles de confianza en comparación con otras corporaciones estatales. Con todo, buena parte del pensamiento y de la discusión cotidiana del salvadoreño común se sigue invirtiendo para crear maneras de combatir esa inseguridad de forma privada. Ello ha provocado que varios ciudadanos estén más tentados a acudir a respuestas fuera del marco legal y de derecho, que en apoyar el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de prevención y de combate de la delincuencia.

Los medios de comunicación

Como es lógico, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en la configuración y modificación de la opinión pública salvadoreña durante 1997. Aunque hay evidencias de que el influjo de los medios no impactó de la misma manera en los distintos aspectos de la opinión popular, está claro que durante 1997 la mayoría de estos se decantó por un apoyo más o menos decidido a la posición del partido oficial.

Frente a la apertura y a los esfuerzos de profesionalización que habían venido mostrando los medios de información en los últimos años después de la firma de los Acuerdos de paz —que inclusive originó confianza entre la población—, 1997 se caracterizó

por haber sido el escenario de un giro de los medios hacia el pasado, hacia la autocensura y hacia el manejo de la información con intereses políticos. Esto parece haber sido provocado por el avance de las opciones opositoras al gobierno como resultado de las elecciones y de la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Enfrentados al problema del desgaste del partido oficial, varios medios asumieron el compromiso de no contribuir más a esa erosión, favoreciendo la divulgación de las informaciones con criterios a favor de la parte oficial. Ello implicó que tanto las informaciones que ponían de relieve algún aspecto positivo del bando oficial como las que implicaban al bando opositor en algún escándalo, recibirían un nivel inusual de tratamiento periodístico; mientras que aquellas que revelaban debilidades del gobierno tanto como aspectos positivos de la oposición, estaban fuera de la pauta informativa. En esta dinámica, los medios participaron activamente en las distintas coyunturas políticas nacionales formando parte de las campañas de alguno de los bandos para convencer al público de ciertas posiciones políticas.

En resumen, desde la perspectiva de la opinión pública este año se caracterizó por un constante, y a veces intenso, debate político. Esto se desarrolló sobre la base del nuevo ordenamiento político en el país que resultó de las elecciones y en un contexto en el cual la mayoría de los salvadoreños continúa estando más preocupada por las dificultades nacionales. Al cerrar el año, tal enfrentamiento continúa y parece que tenderá a aumentar en el próximo año en la medida en que la aproximación a la campaña presidencial de 1999, vaya dando un sentido más electoral a la polarización. Los partidos más grandes parecen estar limpiado el terreno de juego para asegurarse como los únicos protagonistas de la contienda en el próximo año, esto será así en la medida en que el resto de fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto no sean capaces de articular un proyecto alternativo —y probablemente único— de nación que involucre a todos los sectores y que pueda responder con soluciones a los ya permanentes problemas nacionales.